



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso: Conflicto de competencia entre el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Itagüí y el Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Medellín

Demandante: PROTECCIÓN S.A.

Demandada: PET LIGHT S.A.

Radicado n.º: 05001-41-05-003-2023-00052-00 (CC-23-048)

Decisión: Asigna competencia

En Medellín, a los ocho (8) días del mes de mayo de dos mil veintitrés (2023), la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, **CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE y VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO**, quien actúa como magistrado sustanciador, decide el conflicto de competencia negativo suscitado entre el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Itagüí y el Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Medellín, dentro del proceso ejecutivo laboral adelantado por PROTECCIÓN S.A. en contra de PET LIGHT S.A.

1. ANTECEDENTES

Por intermedio de apoderado judicial, PROTECCIÓN S.A. pretende que se libre mandamiento ejecutivo de pago contra PET LIGHT S.A. por las sumas de \$6.281.358 por concepto de capital adeudado por aportes obligatorios a pensión, de \$509.800 por concepto de intereses moratorios al 12 de septiembre de 2022 y los que se causen hasta la fecha de pago efectivo de la obligación, así como el pago de las costas procesales, tras argüir que la sociedad demandada cuenta con trabajadores afiliados a dicha AFP, correspondiéndole al empleador efectuar oportunamente las autoliquidaciones de los respectivos aportes en pensiones, habiendo incumplido dicha obligación en la suma de \$6.791.158, según el título ejecutivo aportado; y que la demandada no atendió los requerimientos efectuados por la AFP para que solucionara dicha deuda por aportes en pensiones ni ha cumplido con el reporte de las novedades.

1.1. TRÁMITE DE INSTANCIA

La demanda fue dirigida por la parte actora al “*JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO DE ITAGÜÍ*” (sic), el 11 de noviembre de 2022 (doc. 01 pág. 1), la que correspondió por reparto al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Itagüí (doc. 02), cuya titular mediante providencia del 21 de noviembre de 2022 (doc. 03) se declaró incompetente para conocer la demanda, ordenando su remisión a los juzgados municipales de pequeñas causas laborales de Medellín, por considerar que “*(...) cuando se pretenda el pago de cotizaciones en mora al sistema, la competencia radica en el juez del lugar del domicilio de la entidad de seguridad social o el de aquel donde se emitió el documento de cobro. En consecuencia, realizado el procedimiento de cobro de las cotizaciones en mora previo a la acción ejecutiva, en los términos de los artículos 24 de la Ley 100 de 1993 y 2 y 5 de su Decreto Reglamentario 2633 de 1994, como se deduce de los documentos anexos al escrito de demanda, y conforme la norma transcrita, el juez competente para conocer del presente trámite es el laboral del pequeñas causas de Medellín, en razón al lugar de creación del título ejecutivo base de recaudo y del domicilio principal de la sociedad ejecutante. (...).*”

1.2. PROPOSICIÓN DEL CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA.

A su turno, el proceso fue repartido al Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Medellín el 27 de enero de 2023 (doc. 05), el que por decisión del 14 de febrero de 2023 (doc. 08) propuso el conflicto negativo de competencia, al considerar que “*(...) el lugar dónde se creó el título ejecutivo fue en Itagüí, y de ello da cuenta la prueba documental (...) donde se evidencia que el “Título Ejecutivo No. 15552-22” base de recaudo, fue constituido en ITAGÜÍ: (...) No obstante, observa ésta juzgadora con extrañeza como se desconoce el fuero electivo que fue ejercido por la parte ejecutante, (...), pues presentó la demanda ejecutiva ante los Jueces Laborales del Circuito de Itagüí (...).*” (SIC).

2. TRÁMITE EN SALA

Propuesto como se encuentra el conflicto negativo de competencia y al no avizorar la Sala circunstancia alguna que pueda dar lugar a la declaratoria de nulidad procesal, corresponde a esta Corporación Judicial emitir una decisión de fondo, para lo cual esta Colegiatura estima conveniente efectuar las siguientes:

2.1. CONSIDERACIONES

De conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 18 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, y en el Acuerdo n.º 108 del 14 de agosto de 1997, corresponde a esta Sala dirimir el conflicto de competencia que se presente entre jueces de la especialidad laboral adscritos al distrito judicial de Medellín.

En orden a lo anterior, se tiene que las pretensiones de la demanda deben tramitarse por la vía ejecutiva laboral, tal y como lo dispone el numeral 5 del artículo 2 del CPT y de la SS, al tratarse de la ejecución de obligaciones emanadas de la relación de trabajo y del sistema de seguridad social integral que no corresponden a otra autoridad.

Al punto, importa resaltar que el numeral 3º del artículo 28 del CGP, aplicable en materia laboral por analogía de conformidad con lo dispuesto por el artículo 145 del CPT y la SS, dispone que:

“(...) En los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. La estipulación de domicilio contractual para efectos judiciales se tendrá por no escrita (...)”

En igual sentido, ha de relievase que a partir de la providencia AL2940-2019, reiterada en las providencias AL1046-2020, AL228-2021, AL2089-2022 y más recientemente la AL4402-2022, entre otras, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia adoctrinó que:

“(...) En el caso bajo examen, si bien no existe una norma en materia procesal del trabajo que consagre de manera clara y precisa la competencia para conocer del trámite de la acción ejecutiva del artículo 24 de la Ley 100 de 1993, encaminada en esta oportunidad al cobro de cotizaciones al Subsistema de Seguridad Social en Salud, lo cierto es que por aplicación analógica conforme lo permite el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la regla que se adapta es la establecida en su artículo 110, puesto que determina la competencia del juez del trabajo en asuntos de igual naturaleza, es decir, en los que se busca garantizar los derechos a la seguridad social de los afiliados a través del cobro ejecutivo a los empleadores de aquellas cotizaciones que no fueron satisfechas oportunamente.

La citada norma señala:

Juez competente en las ejecuciones promovidas por el Instituto de Seguros Sociales. De las ejecuciones de que trata el artículo anterior y el 32 de la Ley 90 de 1946 conocerán los jueces del trabajo del domicilio del Instituto Colombiano de Seguros Sociales o de la caja seccional del mismo, que hubiese proferido la resolución correspondiente y de acuerdo con las reglas generales sobre competencia por razón de la cuantía.

Debe precisarse entonces, que el transcrito precepto adjetivo legal, además, es el aplicable al caso, porque para la época de expedición del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (año 1948), la única entidad administradora del Sistema de Seguridad Social lo era el Instituto de Seguros Sociales, mientras que, con la Ley 100 de 1993, se originó la creación de diferentes administradoras de los subsistemas que lo integran, sin que se determinara tampoco, como se anunció precedentemente, en quién recaía la competencia para conocer de la ejecución por cotizaciones a la seguridad social insolutas, situación que como se dijo, sí estaba prevista en su momento para el ISS, y que en tal virtud, resulta ser la más cercana para dilucidar el presente conflicto.”

Precedente judicial a partir del cual refulge palmar que en tratándose de la ejecución de los aportes obligatorios en pensiones, la competencia ha de radicarse “(...) en el juez del lugar del domicilio de la entidad de seguridad social o el de aquel en el que se profirió la resolución o el título ejecutivo correspondiente que puede coincidir con aquél (...)” (AL4402-2022).

A partir del recuento legal y jurisprudencial en cita, y descendiendo al *sub lite*, tenemos que la sociedad ejecutante fundamenta su solicitud de ejecución en el “*Título Ejecutivo No. 15552-22*” (doc. 01 págs. 7 y 10), y no en el documento mediante el cual se requirió al empleador para el pago de los aportes en mora previo a instaurar el proceso ejecutivo (doc. 01 págs. 13 a 16), como erróneamente estimó el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Itagüí (doc. 03 pág. 2), en la medida en que tal requerimiento constituye apenas un acto preparatorio para la expedición del título ejecutivo, pero no constituye un título ejecutivo *per se*, como pareció entender erradamente el despacho judicial en cita.

Luego, verificado el título ejecutivo adosado a la demanda ejecutiva, se observa que en el “*Lugar y Fecha de Expedición del Título Ejecutivo*”, se indica que lo fue en el Municipio de “*ITAGUI*” (sic), el “*5 de octubre de 2022*” (doc. 01 pág. 10).

Ahora bien, conviene anotar por la Sala, que independientemente del domicilio de las partes, lo cierto es que, en los casos en los que la demanda puede ser conocida por 2 o más jueces, lo que se conoce doctrinariamente como “*fuero electivo*”, es el promotor del juicio quien puede optar por el que a bien tenga, siendo que en el *sub litium* es más que evidente que Protección S.A. optó por adelantar el presente proceso en el Municipio de Itagüí (docs. 01 pág. 1 y 2), resultando entonces verdaderamente fútil la razón por la cual el despacho judicial de tal municipalidad decidió remitir las diligencias a los juzgados de Medellín.

De suyo que, la competencia para conocer y decidir el proceso de la referencia está radicada inequívocamente en el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Itagüí, y así se declarará por la Sala.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

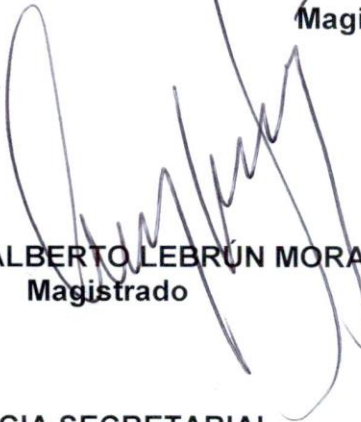
PRIMERO: DECLARAR que el JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE ITAGÜÍ, es el competente para conocer la demanda ordinaria laboral promovida por PROTECCIÓN S.A. contra PET LIGHT S.A., según y conforme lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: En consecuencia, remítase el expediente contentivo de la demanda ejecutiva laboral promovida por PROTECCIÓN S.A. contra PET LIGHT S.A. al JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE ITAGÜÍ, el que debe asumir el conocimiento de la misma.

TERCERO: Informar lo resuelto en este proveído al JUZGADO TERCERO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE MEDELLÍN.

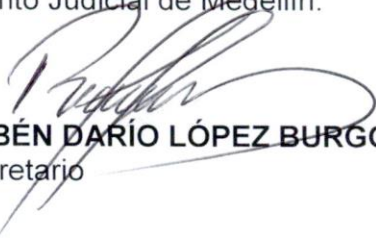
NOTIFÍQUESE POR ESTADO,


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado Ponente


CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES
Magistrado


SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada

CONSTANCIA SECRETARIAL
Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín.


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario

Certifico: Que el auto anterior fue notificado por **ESTADOS n.º 77** fijados hoy en la secretaría de este Tribunal a las 8:00 a.m. Medellín, 9 de mayo de 2023, y pueden consultarse en <https://tribunalmedellin.com/laboral/estados-edictos-y-traslados-laboral>

Secretario